

Santiago, veinte de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-14219-2019, del 18° Juzgado Civil de Santiago, sobre procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de cuatro de agosto de dos mil veinte, se acogió las demandas deducidas por José Raúl Celpa López, Alicia Berta Cubillos Gaete y Paulina Constanza Celpa Cubillos, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a favor del primero, como resarcimiento del daño moral padecido, y la cantidad de \$ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a favor de las dos últimas, por concepto de daño moral reflejo sufrido, más reajustes e intereses.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de siete de enero de dos mil veintiuno, la revocó, solo respecto de la condena en costas impuesta al Fisco de Chile, liberándolo de dicho gravamen, confirmándola en lo demás.

Contra esa sentencia el Consejo de Defensa del Estado, dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Considerando:

Primero: Que, el recurso denuncia como primer error de derecho la falta de aplicación y contravención formal del estatuto legal especial de calificación de las víctimas de prisión política y tortura, establecidos en la Ley N° 19.992 en relación al D.S. 1040, de Interior, de 2003, que establecieron el procedimiento de determinación de la calidad de víctimas Valech, que no detentan las demandantes Alicia Cubillos Gaete y Paulina Celpa Cubillos.



Expresa que la demanda debió rechazarse, por cuanto el demandante principal Raúl Celpa se encuentra calificado como víctima reconocida por el Estado en virtud de la Ley N° 19.992, mas no las demandantes por daño moral reflejo, que, conforme a resuelto por los sentenciadores, están demandando un daño propio.

Arguye que al no haberse aplicado el estatuto especial legal de calificación de víctimas de prisión política y tortura establecido en la mencionada ley, se ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto, en términos categóricos, las demandantes por daño moral reflejo no tienen la calificación legal de prisioneras políticas y/o torturadas, por lo tanto carecen de legitimación activa para demandar por dicha causa de pedir, lo que así debió ser declarado.

Un segundo error de derecho consiste en la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, por cuanto la sentencia vulneró los artículos 1698, 1700, 1702, 1704 y 2314 todos del Código Civil y los artículos 341 y 383 del Código de Procedimiento Civil.

Explica que al tratarse de una acción de indemnización de perjuicios por daño moral reflejo, en que se alegan la existencia de daño personal propio, y no el personalísimo sufrido por el demandante principal Raúl Celpa, correspondía a las actoras Alicia Cubillos Gaete y Paulina Celpa Cubillos, acreditar los daños morales propios sufridos, como también los hechos que lo configuran, naturaleza y monto de los mismos.

Arguye que se consideró como medio de prueba para acreditar el daño moral, uno no señalado en el artículo 1698 del Código Civil, ni en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, los informes emitidos tanto por el Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), Derechos Humanos como por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias



Cristianas, no tiene valor probatorio respecto de las demandantes por daño moral reflejo, no sólo porque no se tratan de instrumentos públicos o privados reconocidos o mandados a tener por reconocidos, sino porque ellos no se refieren en parte alguna a la situación concreta de las demandantes de daño moral reflejo, por lo que no pudieron ser considerados como medios de prueba para acreditarlo.

Afirma que se le ha otorgado a la prueba testimonial un valor probatorio distinto al señalado en el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no tiene el valor de plena prueba respecto del daño moral reflejo, atendido que los testigos declararon sobre los hechos y daño que afectaron a Raúl Celpa.

Agrega que los sentenciadores alteraron el peso de la prueba, regulado en el artículo 1698 en relación con el artículo 2314, ambos del Código Civil, pues no tienen por acreditados hechos precisos y concretos ni la entidad del daño moral reflejo alegado por las demandantes, conforme lo exigía la interlocutoria de prueba en sus puntos 1° y 2°, y luego en base a prueba improcedente (dos informes, que como se indicó, nada dicen sobre las demandantes), resuelve que “es posible entender que naturalmente han sufrido una aflicción producto de los tratos inhumanos a que fueron expuestas por agentes del Estado”.

Por ello, señala que no obstante reconocer el propio sentenciador que lo que demandan como daño moral reflejo es un daño propio, distinto del que sufrió el demandante principal y que este daño moral reflejo no ha sido suficientemente acreditado, igual acoge, con infracción a las normas reguladoras de la prueba, la demanda por daño moral reflejo.

También señala que se vulneró la norma reguladora de la prueba contenida en el artículo 1700 del Código Civil en relación al artículo 342 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, se negó valor probatorio al instrumento público consistente en el Ord. 59.023/2019 del Instituto de Previsión Social que acreditó



que las demandantes por daño moral reflejo no se encuentran reconocidas como víctimas de prisión política y/o tortura.

Un tercer error de derecho se funda en el quebrantamiento del artículo 2332 del Código Civil, en relación a los artículos 2492, 2497, 2514 y 2314 y 19 y 22 del mismo cuerpo legal, infracciones que se han producido por una errada aplicación de estas normas y falta de aplicación de las restantes a la materia de autos, en circunstancias de hallarse regida por ellas y sin que exista norma jurídica alguna de Derecho Interno o Internacional que las derogue o excluya, por cuanto respecto de las demandantes no se acreditó la calidad de víctimas reconocidas por el Estado de delitos de prisión y/o tortura, ni acreditaron en forma clara, precisa y concreta, el daño reflejo que reclaman.

También señala que la sentencia incurre en el error de derecho por falsa aplicación de tratados internacionales, que en ningún caso contemplan la imprescriptibilidad de las acciones civiles, menos aún respecto de demandantes por daño moral reflejo que no tienen la calidad de víctimas reconocidas por el Estado, ni acreditaron su daño propio.

Concluye solicitando se acoja el recurso, anulando la sentencia de segunda instancia que confirma la de primera, dicte otra de reemplazo que rechace en definitiva la demanda conjunta por daño moral reflejo.

Segundo: Que como se desprende de autos, son hechos indiscutidos:

1.- Que José Raúl Celpa López fue detenido junto a cónyuge e hija de cuatro años, en abril de 1974 y luego separado de ellas. Así también fue detenido posteriormente en varias ocasiones durante esa época, siendo torturado durante los períodos de privación de libertad, lo que le ha causado secuelas físicas y psicológicas.



2.- Que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura calificó al demandante José Raúl Celpa López como víctima de violaciones a los derechos humanos.

3.- Que Alicia Berta Cubillos Gaete y Paulina Constanza Celpa Cubillos son cónyuge e hija respectivamente, de José Raúl Celpa López.

Tercero: Que procede, entonces, analizar los capítulos del recurso deducido, resultando necesario tener en consideración que la acción civil deducida en contra del Fisco de Chile tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, lo que resulta plenamente procedente, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, Rol N° 15.402-18, de 21 de febrero de 2019 y Rol N° 29.448-18 de 27 de agosto de 2019, entre otras).

Cuarto: Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre



por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

El artículo 6° de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional de descartar la aplicación de las disposiciones legales que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6° enseña que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”, y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.



Quinto: Que en lo referente al primer error de derecho denunciado por el recurrente, consistente en la falta de aplicación de la Ley N° 19.992, por cuanto las demandantes no están reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, los sentenciadores establecieron que la acción deducida por las demandantes se funda en el daño reflejo o por repercusión sufridos por ellas por hechos que afectaron a otra persona, en este caso Raúl Celpa López, de quien no se discute esa calidad de víctima, cónyuge de Alicia Cubillos Gaete y padre de Paulina Celpa Cubillos, por lo que concluyen que se trata del perjuicio propio y no el de la víctima inmediata.

De lo expresado, se concluye que las demandantes no fundaron su acción en el hecho que fueran víctimas de prisión preventiva y tortura, sino en el daño que les provocó el sufrimiento padecido por su cónyuge y padre respectivamente, quien tiene esa calidad conforme a los hechos establecidos por la sentencia, esto es, el daño reflejo o por repercusión, que *“es el sufrido por víctimas mediatas de un hecho que ha causado la muerte o lesiones a otra persona”*, que puede ser moral y el perjuicio es propio y no de la víctima inmediata (Enrique Barros Bourie; Tratado de Responsabilidad extracontractual, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, año 2022, página 362 y 363).

De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas establecidas en la Ley N° 19.992, respecto al reconocimiento de la calidad de víctimas de las demandantes, pues no es el fundamento que los sentenciadores tuvieron en consideración para conceder la indemnización de perjuicios, sino que el daño provocado por los agentes del Estado a su cónyuge y padre respectivamente.

Por lo anterior, no resulta aplicable en la especie la Ley N° 19.992, al basarse la acción entablada por las actoras en el daño reflejo o por repercusión



provocado a otra persona, la que fue reconocida como víctima de prisión política y tortura, daño que es propio.

Sexto: Que, en lo referente a la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, específicamente a los artículos 1698, 1700, 1702, 1704, en relación al artículo 2314 del Código Civil, y los artículos 341 y 383 del Código de Procedimiento Civil, aunque el recurrente se esmera en presentar sus alegaciones como dirigidas a la denuncia de infracción de leyes reguladoras de la prueba, lo cierto es que del tenor del recurso es posible advertir que lo que impugna es la valoración que los jueces del fondo hicieron de la prueba que se rindió en el proceso, pues se limita a aseverar que la sentencia concedió mérito probatorio a las probanzas que rindieron en la causa las demandantes, particularmente la prueba documental y testimonial, situación que se refiere en realidad a la ponderación que los sentenciadores hicieron de ella, lo que corresponde al ejercicio de las facultades que les son propias. No ocurre, como se afirma en el recurso, que se haya dado un valor distinto del asignado por la ley a determinados documentos, o a los testimonios recibidos, sino que, conforme al conjunto de medios probatorios y las relaciones de matrimonio y filiación de las demandantes con la víctima de la prisión preventiva y torturas reconocida por el Estado de Chile, se logró acreditar el sufrimiento provocado a ellas.

Séptimo: Que, en lo referente al tercer capítulo del arbitrio, debe tenerse presente que en lo concerniente al recurso intentado por el Fisco de Chile, aparece de los antecedentes que los hechos en que se funda la demanda caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad, lo que declara expresamente el fallo en el fundamento décimo segundo, y constituyen por ende una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta plenamente procedente resarcir a las actoras.



Octavo: Que en reiterada jurisprudencia esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de esta especial naturaleza, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito (En este mismo sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento distinto, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente. Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.

Noveno: Que en el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de



impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.

Décimo: Que por otro lado, las acciones civiles aquí deducidas por las demandantes en contra del Fisco tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Undécimo: Que estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que



consagran este derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

Duodécimo: Que de otra parte, la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Décimo tercero: Que, por último, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso del Fisco de Chile, quedarían sin aplicación.



Por las reflexiones precedentes el recurso de casación en el fondo del Fisco de Chile será desestimado en todos sus capítulos.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo formalizado por el Fisco de Chile, en contra de la sentencia de siete de enero de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuaud.

Rol N° 12.458-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S, Sra. María Teresa Letelier R. y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud. No firma el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a veinte de octubre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

